

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: CAROLINA FRANCO ROJAS
DEMANDADO	: CARLOS ALBERTO MUÑOZ LONDOÑO, MANUEL ANTONIO PÉREZ GALVIS, CONFECCIONES SEBASTIÁN Y MIGUEL SAS,
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-002-2022-00290-01
RADICADO INTERNO	: 164-23
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, CONDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 237

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se **DECLARE** que entre las partes existió un contrato laboral a término indefinido desde el 2 de enero de 2012 al 15 de diciembre de 2021; que la demandante fue despedida en forma indirecta y obligada a presentar carta de renuncia involuntaria como consecuencia del pago deficitario de su salario, por no pago de sus prestaciones sociales, la no afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, el trato inhumano recibido por los empleadores, los turnos laborales de más de doce horas diarias; se declare que el despido de la demandante no produce efectos jurídicos; que durante toda la vigencia del contrato laboral, no le fueron consignados los aportes a al Sistema de Seguridad Social ni las prestaciones sociales y vacaciones.

Como **pretensiones principales** solicita se **CONDENE** a los demandados, de manera individual, conjunta o solidaria a:

- Reintegrar a la demandante, sin solución de continuidad, a un puesto de trabajo de igual o superior jerarquía al que desempeñaba al momento de su desvinculación;
- Como consecuencia del reintegro, se condene a los demandados al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás conceptos laborales causados y no pagados durante la vigencia del contrato, y entre la fecha del despido indirecto hasta que sea efectivamente reintegrada a su puesto de trabajo;
- Afiliar a la demandante al Sistema de Seguridad Social Integral y reliquidar y pagar los aportes causados y no cotizados al respectivo fondo durante la vigencia del contrato y entre la fecha del despido indirecto hasta que sea efectivamente reintegrada a su puesto de trabajo;
- Se ordene a los demandados, reintegrar a la demandante todos los valores que no le fueron pagados por horas extras durante su vinculación laboral.

Como pretensiones subsidiarias, solicita que, en caso de no acceder a las anteriores pretensiones, se CONDENE a los demandados de manera individual, conjunta o solidaria al pago de:

- La indemnización de 180 días de salario por haber sido despedida sin justa causa como consecuencia de su renuncia indirecta e imputable a los demandados;
- La indemnización y sanción moratoria de los artículos 65 del CST y artículo 99 de la Ley 50 de 1990;
- Los intereses a las cesantías doblados por la falta de pago y pago deficitario de salarios y prestaciones sociales, vacaciones y demás conceptos laborales;
- Los intereses legales sobre las sumas susceptibles de estos o a la indexación de las condenas;
- Las costas procesales;
- Reintegrar a la demandante todos los valores que no fueron pagados por concepto de horas extras durante el vínculo laboral;
- Pagar el reajuste de prestaciones sociales, vacaciones y demás conceptos de manera retroactiva en el transcurso de toda la vida laboral;
- El reajuste de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, con el pago de los respectivos intereses, teniendo en cuenta para ello los

salarios realmente devengados por la mandante durante la vigencia del vínculo laboral;

- El pago de los intereses legales sobre las sumas susceptibles de éstos o, en su defecto, la indexación de las condenas;
- Las sumas de dinero objeto de las condenas, se paguen debidamente indexadas.

Como fundamento fáctico de las pretensiones indicó que, se vinculó como Operaria de Confecciones en la empresa Confecciones MAP, mediante un contrato laboral a término indefinido, a partir del 2 de enero de 2012 hasta el 15 de diciembre de 2021; su jornada laboral era de lunes a sábado, de 7:00 am a 5:00 pm, aclarando que al demandante asistía de lunes a sábado de 5:00 am a 5:00 pm; el contrato que firmó la demandante nunca le fue entregado, ni leído, porque le hacía firmar la última hoja, razón por la que desconoce las condiciones del contrato; el jefe directo de la demandante era el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño, del cual recibía ordenes, le imponía los turnos de trabajo, realizaba los pagos, realizaba llamados de atención y hacía reuniones.

Sostiene la demandante que la labor desempeñada en la empresa Confecciones MAP, representada legalmente por el Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis fue hasta junio de 2012, momento en el que fue cancelada la matrícula mercantil; al momento de la cancelación de esa matrícula mercantil, la demandante continuó sin interrupción de sus labores, en las mismas instalaciones, los mismos empleadores (los señores Manuel Antonio Pérez Galvis y Carlos Alberto Muñoz Londoño), el mismo salario y las mismas condiciones, pero la razón social era Confecciones y Creaciones MAP; en el año 2016, trabajando en las mismas condiciones anteriormente descritas y sin interrupciones, el empleador canceló nuevamente la razón social para constituir la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS, establecimiento que se encuentra vigente y en el cual la demandante laboró hasta el 15 de diciembre de 2021, fecha en la cual la demandante se vio obligada a presentar renuncia involuntaria, al no pagarle las prestaciones sociales, salarios, horas extras y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

La demandante manifiesta que el salario devengado era el básico mensual, 2 horas extras diurna y 2 horas extras nocturnas diarias, además de los conceptos laborales. Lo anterior lo representó en la siguiente gráfica:

Año	Salario Básico Mes	Valor Hora	Valor Extra Diurna	Valor Extra Nocturna
2012	\$566.700	\$2.361	\$2.951	\$4.132
2013	\$589.500	\$2.456	\$3.070	\$4.298
2014	\$616.000	\$2.566	\$3.208	\$4.491
2015	\$644.350	\$2.685	\$3.356	\$4.698
2016	\$689.455	\$2.873	\$3.591	\$5.027
2017	\$737.717	\$3.074	\$3.842	\$5.379
2018	\$781.242	\$3.255	\$4.069	\$5.696
2019	\$828.116	\$3.450	\$4.313	\$6.038
2020	\$877.803	\$3.657	\$4.572	\$6.400
2021	\$908.526	\$3.785	\$4.732	\$6.625

Aclaró que la jornada ordinaria laboral era de 7:00 am a 5:00 pm, pero la demandante ingresaba a laborar desde las 5:00 am, entonces, de 5:00 am a 7:00 am, realizaba una hora extra nocturna y una hora extra diurna diarias. En la tarde, realizaba otras 2 horas extras diurnas, porque salía a las 5:00 pm. Dice la demandante, que arroja una hora extra nocturna y tres horas extras diurnas diarias. En la semana, la demandante trabajaba un total de 18 horas extras diurnas y 6 horas extras nocturnas.

En el año, la demandante trabajó las siguientes horas extras diurnas y nocturnas por año: (455 días) x (\$8.853) valor de tres horas diurnas para el año 2012 (455 días) x (\$4.132) valor de una hora extra nocturna para el año 2012, el resultado sería así para cada año:

Año	Días Laborados	Valor Horas Extras Diurnas	Horas Extras Nocturnas
2012	455 Días	\$4.028.115	\$1.880.060
2013	455 Días	\$4.190.550	\$1.955.590
2014	455 Días	\$4.378.920	\$2.043.405
2015	455 Días	\$4.580.940	\$2.137.590
2016	455 Días	\$4.901.715	\$2.287.285
2017	455 Días	\$5.244.330	\$2.447.445
2018	455 Días	\$5.554.185	\$2.591.680
2019	455 Días	\$5.887.245	\$2.747.290
2020	455 Días	\$6.240.780	\$2.912.000
2021	455 Días	\$6.459.180	\$3.014.375
Valor Total Horas Extras Diurnas Adeudadas:		\$51.465.960	
Valor Total Horas Extras Nocturnas Adeudadas:		\$24.016.720	

Nunca le fueron reconocidas ni pagadas las horas extras ni el auxilio de transporte, por lo que considera que se le adeudan un total de \$62.092.848 discriminados así:

- \$10'075.440 por subsidio de transporte durante la relación laboral
- \$21'613.824 por horas extras diurnas durante la relación laboral
- \$30'403.584 por horas extras diurnas durante la relación laboral

También le adeudan la consignación del auxilio de cesantía anual de los años 2012 al 2021, la reliquidación de la prima de servicios, interés al auxilio de cesantía, vacaciones, de todo el tiempo laborado con los recargos por horas extras; reliquidación y pago con el valor real del salario de los aportes a la seguridad social por todo el tiempo servido; y la indemnización por renuncia indirecta para un total de \$20'633.954, discriminado así:

Año	Sal. Básico Mens.	Cesantías	Int. a las cesant.	Primas	Vacaciones
2012	\$566.700	\$634.500	\$76.140	\$634.500	\$283.350
2013	\$589.500	\$660.000	\$79.200	\$660.000	\$294.750
2014	\$616.000	\$688.000	\$82.560	\$688.000	\$308.000
2015	\$644.350	\$718.350	\$86.202	\$718.350	\$322.175
2016	\$689.455	\$767.155	\$92.059	\$767.156	\$344.728
2017	\$737.717	\$820.857	\$98.503	\$820.858	\$368.859
2018	\$781.242	\$869.453	\$104.334	\$869.454	\$390.621
2019	\$828.116	\$925.148	\$111.018	\$925.148	\$414.058
2020	\$877.803	\$980.657	\$117.679	\$980.658	\$438.902
2021	\$908.526	\$972.689	\$111.859	\$972.689	\$435.335
		\$8.036.809	\$959.554	\$8.036.813	\$3.600.778

Sostiene que la demandante y varias compañeras de trabajo, le reclamaron a los codemandados el pago de aportes a Seguridad Social, vacaciones y auxilio de cesantía, donde la respuesta quera que no podían realizar dichos pagos; la demandante se vio obligada a presentar la renuncia indirecta a su cargo el 15 de diciembre de 2021, por el incumplimiento en el pago de las quincenas completas, ni los aportes a seguridad social y por la presión constante que recibía de los señores Manuel Antonio Pérez Galvis y Carlos Alberto Muñoz Londoño, quienes le exigían realizar mayor producción a la que podía.

El Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño, quién era administrador y jefe directo, no aceptó su renuncia y le exigió que debía terminar el trabajo hasta el 30 de diciembre. Agrega que los codemandados no realizaron las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño se negó a entregarle el contrato de trabajo y emitió un certificado donde plasma afirmaciones falsas, que la demandante supuestamente prestó sus servicios profesionales como operadora de máquinas de confección, a sabiendas que la demandante tenía un contrato laboral, recibió un pago quincenal, recibía ordenes, cumplió horario, se asistía a reuniones y prestaba de manera personal su trabajo y no podía faltar a ninguna jornada laboral.

CONTESTACIONES A LA DEMANDA

La parte pasiva de la litis al dar respuesta a la demanda, acepta que la demandante renunció; que la sociedad vigente es Confecciones Sebas y Migue SAS; que la demandante percibía un salario básico. Frente a los demás hechos de la demanda, aseguró que no son ciertos y aseguró que presentaron contratos a término fijo con los siguientes extremos:

- Del 12 de abril al 30 de diciembre de 2012 = 8 meses y 18 días
- Del 20 de abril al 30 de diciembre de 2013
- Del 1º de febrero al 23 de diciembre de 2014
- Del 2 de febrero al 14 de diciembre de 2015
- Del 1º de marzo al 30 de diciembre de 2016
- Del 1º de marzo al 30 de diciembre de 2017
- Del 1º de marzo al 30 de diciembre de 2018
- Del 1º de marzo al 30 de diciembre de 2019
- Del 1º de marzo al 30 de diciembre de 2019 (sic)
- Del 9 de marzo al 30 de diciembre de 2021

Los anteriores contratos las partes los llamaron de prestación de servicios, en los cuales, en su cláusula novena se estipuló la absoluta autonomía, de actuar por su propia cuenta y no sería subordinada; que no es cierto que la demandante tuviera que cumplir las órdenes impartidas, debido a que se sostiene que era su propio jefe, que entraba y salía a su voluntad, y no se realizaron llamados de atención; la demandante no trabajaba horas extras; no se le debe auxilio de transporte porque al final del contrato se le pagó a pesar de la cercanía del sitio de residencia la demandante; se realizó el pago de las prestaciones sociales durante el tiempo laborado; la demandante no se vio obligada a renunciar y por el contrario el empleador le pidió que se quedaría hasta el 30 de diciembre, pero unilateralmente decidió quedarse hasta el 15 de diciembre de 2021.

Frente a las pretensiones manifiesta que es imposible se declare su prosperidad. Propuso las excepciones de mérito, las de incongruencia entre los hechos y prestaciones – art. 281 del CGP; cobro de no debido; falta de petición en sustitución patronal; carencia de mandato en la mandataria para demandar al Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño como representante legal de Confecciones Sebas y Miguel SAS, la excepción genérica y la prescripción extintiva (expediente digital 03 y 06).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 29 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, DECLARÓ que entre la demandante y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS y el Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis en calidad de persona natural, existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido entre el 2 de enero de 2012 y el 15 de diciembre de 2021; declarando que entre dichos empleadores ocurrió la figura de la sustitución patronal.

ABSOLVIÓ de las pretensiones incoadas en contra del Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño, en calidad de persona natural.

CONDENÓ al Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis y a la sociedad Confecciones Sebas y Miguel SAS de manera solidaria, para que soliciten y paguen el cálculo actuarial de los aportes a la seguridad social en pensión de los periodos del 2 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2015 a la AFP elegida por la demandante o a la que se encuentra afiliada.

Condenó a la sociedad Confecciones Sebas y Miguel SAS al pago de los aportes a la seguridad social desde el 1º de enero de 2016 al 15 de diciembre de 2021, y ordena solicite la liquidación y realice el pago de los aportes indicados, a la AFP que elija la demandante o a la que se encuentre afiliada. Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción. Condenó en costas a favor de la parte demandada.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante, apela la decisión de primera instancia, manifestando que se encuentra probado con los testimonios y el interrogatorio absuelto por la demandante, que recibió la suma de \$850.000, suma que no corresponde a una liquidación de 9 años de trabajo y asegura que a la demandante nunca le pagaron vacaciones, no le consignaron el auxilio de cesantía, ni le pagaron los intereses a la cesantía.

Con fundamento en lo anterior, solicita se tenga en cuenta que la prescripción de la sanción moratoria por no consignar el auxilio de cesantía prescribe a los 3 años contados a partir de la fecha que se causó la mora, ello es, a partir del 15 de febrero de cada año, que es la fecha en que se venció el plazo para consignar el auxilio de cesantía.

Afirma que la indemnización moratoria surge desde el momento en que se causa la mora de la consignación del auxilio de cesantía, fecha en que debe ser reclamada, sin embargo, la demandante no tenía por qué reclamar, toda vez que el contrato laboral a término indefinido estaba vigente y la única opción fue demandar fue al presentar la renuncia, por lo tanto, considera que el auxilio de cesantía no ha prescrito y se presentó la demanda dentro de los tres años.

En segundo lugar, frente a las vacaciones, sostiene que las mismas se causan al cumplir el año de servicios y son exigibles un año después; que se encuentra probado que los trabajadores salían a vacaciones colectivas, pero no hay prueba del pago de las mismas, toda vez que la demandante habló del reconocimiento de una bonificación de \$850.000, suma frente a la cual no se tiene claridad a qué concepto pertenece.

Manifiesta que presenta recurso de apelación respecto al tema de vacaciones, auxilio de cesantías, interés a la cesantía y prima; invoca la sentencia 46.704 de 2016 que hace referencia a al fenómeno jurídico de la prescripción, y de dicha sentencia hace énfasis en lo relativo a la prescripción de las vacaciones; concluye la apelante, que las vacaciones prescriben luego de 4 años de causadas y no reclamadas; igualmente hace referencia a la sentencia 39.023 de 2013 que hace referencia a la compensación en dinero de las vacaciones y su prescripción; que una vez terminado el contrato de trabajo surge el derecho del trabajador a que se compensen en dinero las vacaciones que no alcanzó a disfrutar como consecuencia de la terminación del vínculo laboral.

En tercer lugar, en relación a sanción por la no consignación al fondo de cesantías, considera que la mala fe se encuentra probada, pues el empleador pretendía disfrazar una relación laboral con una relación civil para defraudar el Sistema de Seguridad Social, además porque el empleador hacía liquidaciones y les entregaba supuestamente el dinero en efectivo, cuando la obligación era consignarlas en un fondo de cesantías. Solicita se de aplicación al principio de la realidad sobre las formas y se proteja el derecho de la demandante al no poder reclamar el auxilio de cesantías que nunca le fueron consignadas pese a ser una obligación del empleador. No se puede hablar que el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño actuó con desconocimiento, ya que contaba con la colaboración de un contador.

Finalmente, en aras de preservar y garantizar la concreción de las condenas, solicita que como medida cautelar se decrete la inscripción de la demanda del establecimiento de comercio Sebas y Miguel SAS, conforme a lo establecido

en la sentencia C043 del 2021, que permite el decreto y practica de medidas cautelares en los procesos declarativos.

El apoderado de la parte demandada, apela la decisión de primera instancia, oponiéndose a la declaración de la existencia de la sustitución patronal, por considerar que en ninguna de las pretensiones ni hechos de la demanda se solicitó el reconocimiento de dicha figura, por el contrario, en la contestación de la demanda se propusieron las excepciones de falta de petición de sustitución patronal. Asegura que hubo una confusión en las pretensiones de la demanda, por presentar en un primer momento unas pretensiones y al suplir las exigencias del despacho presentó otras, lo cual llevó a que en los alegatos de conclusión se hizo referencia a pretensiones que no estaban en la demanda, por lo que solicita que se analice esa confusión, que es la misma en la que incurrió la A Quo, al reconocer la sustitución patronal; al no ser solicitado el reconocimiento de la sustitución patronal, al juez no puede reconocerla de oficio, pues ese actuar genera incurrir en una incongruencia del art. 281 del CGP y en su momento se propuso como excepción de mérito.

En segundo lugar, solicita se revoque el pago solidario del Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS por el periodo del 1º de febrero de 2016 al 2015 (sic), y el pago de la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS del periodo de 2016 al 15 de diciembre de 2021, solidaridad que se derivada de la sustitución patronal que no fue solicitada por la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes no presentan alegatos de conclusion.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar: i) Si hay lugar a revocar la declaración la sustitución patronal; ii) Si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, vacaciones y a la sanción moratoria por no consignación del auxilio de cesantía; iii) Si operó el fenómeno de la prescripción; iv) Si hay lugar a decretar como medida cautelar, la inscripción de la demanda del establecimiento de comercio Sebas y Miguel SAS.

Para el caso en concreto, se aportó al proceso por la demandante, certificado emitido por el representante legal de la sociedad Confecciones Sebas y Miguel SAS el 19 de julio de 2021, donde manifiesta que la demandante laboró en el cargo de operaria de máquinas desde el 2 de enero de 2012 y los honorarios mensuales promedios eran de \$1.500.000 (fl. 32 del expediente digital 01). Los accionados aportaron con la contestación a la demanda, contratos de prestación de servicios celebrados del 1º o 2 de marzo al 30 de diciembre de cada anualidad en los años 2012 a 2021 (fls. 12 a 31 del expediente digital 06); liquidaciones de prestaciones sociales de los años 2012 a 2020 (fls. 32 a 40).

Los recursos de apelación se resolverán en el siguiente orden:

1. De la sustitución patronal

Haciendo un recuento de la decisión de primera instancia, se declaró la existencia del contrato de trabajo a término indefinido del 2 de enero de 2012 y el 15 de diciembre de 2021, teniendo como sustento, que en la contestación de la demanda se aceptó la labor desempeñada del 2 de enero de 2012 al 15 de diciembre de 2021, pero conforme el principio de la realidad sobre las formas, no fue aceptado por la A Quo, que se tratara de contratos civiles alegados por los accionados, al ser aportadas liquidaciones definitivas de prestaciones sociales de cada anualidad, las cuales resultan ajenas a una relación de carácter civil, y porque de la prueba testimonial la parte demandada, extrajo la A Quo, los accionados desbordaron su actuar y tuvieron control del servicio prestado, sin que se pueda decir que la demandante tuviera autonomía e independencia, ya que la demandante no podía determinar sus funciones, debía asistir diariamente, el pago se realizaba por día laborado, la jornada laboral podía extenderse según la cantidad de trabajo o producción que se exigiera y la demandante debía ejecutar el servicio de manera personal.

Igualmente se advirtió en primera instancia, que esa relación laboral se dio entre la demandante y el Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis (como persona natural) y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS representada legalmente por el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño, y no con el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño como persona natural, en vista que su actuar era en calidad de representante legal.

Se declaró que el contrato se dio sin solución de continuidad, en vista que pese a existir contratos de prestación de servicios que iniciaban el 1º de marzo y

finalizaban el 30 de diciembre de cada anualidad, con una presunta interrupción de 2 meses, la prueba testimonial la de la parte demandada dio cuenta, que el cese de actividades en los meses de enero y febrero de cada anualidad era ficticia, ya que todos los trabajadores incluyendo la demandante salían entre el 15 o 20 de diciembre y regresaban aproximadamente el 10 de enero de cada año.

Y se pronunció respecto a la sustitución patronal, porque al estar demostrada la relación laboral, en las mismas instalaciones, con idénticas funciones y modalidad contractual, idéntico horario y jefe inmediato, se cumplen los presupuestos de ley para entender que existió una sustitución patronal entre el Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis y la sociedad Confecciones Sebas y Miguel SAS, lo que los hace solidariamente responsable.

Una vez analizado el plenario, considera la Sala que no le asiste razón al apoderado de la parte accionada cuando ataca la falta de congruencia de la sentencia frente a las pretensiones y hechos de la demanda al declarar la sustitución patronal, y haber pasado por alto la excepción previa de falta de petición de la sustitución patronal, pues si bien es cierto el art. 281 del CGP limita que la sentencia sea consonante con los **hechos** y pretensiones de la demanda, no se puede pasar por alto que:

El art. 67 del CST define la sustitución patronal como *“todo cambio de un {empleador} por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste **no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios**”* (Resalto de la Sala).

Y en el **hecho 3º de la demanda** encontramos que la demandante señaló que inició sus labores en el año 2012 con la sociedad Confecciones MAP representada legalmente por el Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis fue hasta junio de 2012, oportunidad en que se canceló la matrícula mercantil pero la demandante continuó sin la interrupción de sus labores, en las mismas instalaciones, los mismos empleadores (los señores Manuel Antonio Pérez Galvis y Carlos Alberto Muñoz Londoño), el mismo salario y las mismas condiciones, con la sociedad Confecciones y Creaciones MAP, y en el año 2016, nuevamente se canceló la razón social pero continuó trabajando en las mismas condiciones anteriormente descritas y sin interrupciones, para la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS.

Siendo, así las cosas, si bien es cierto que en la demanda no se solicita la declaración de la sustitución en forma expresa, no se puede pasar por alto que el numeral 5º del art. 42 del CGP, le impone al Juez el deber de interpretar la demanda respetando el derecho de contradicción y el principio de congruencia. Y en ese sentido se considera, que el Juzgado de conocimiento estaba en deber de interpretar la demanda en la cual se puso de presente el ejerció de las labores de operaria de maquinaria desde el año 2012 y pese a la cancelación de las matricular mercantiles de las sociedades Confecciones MAP y Confecciones y Creaciones MAP, nunca varió el giro de las actividades de la demandante, continuando su ejecución sin la interrupción, en las mismas instalaciones, los mismos empleadores y el mismo salario. Por lo tanto, puede decirse que en los hechos de la demanda, reposaba en forma implícita el enunciado de la sustitución patronal.

Y por su fuera poco, también hay lugar a conformar el pronunciamiento realizado por la A Quo frente a la sustitución patronal, pues a la luz del art. 50 del CPT y SS, contaba con la potestad de fallar más allá de lo pedido *“cuando los hechos que los orígenes hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados”*. Presupuesto procesal que se cumple en este evento, pues el hecho 3º de la demanda encuentra sustento probatorio, en las declaraciones de los testigos de ambas partes, los cuales fueron compañeros de trabajo de la hoy demandante en diferentes anualidades en que se desarrolló el contrato de trabajo, y en forma particular señalaron: la **Sra. Reina Balbín Rodríguez** dijo haber trabajado para el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño del 25 de mayo de 2008 al 23 de diciembre de 2012; trabajó con la demandante aproximadamente un año; y la labor de la demandante era operaria de maquina presilladora. La testigo **Jessica Oquendo Rojas** dijo haber trabajado para el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño del 20 de agosto de 2014 al 3 de agosto de 2019; trabajó con la demandante en la sociedad Confecciones MAP; la labor de la demandante y ella era de operaria de maquina presilladora; la **Sra. Yuliana Jiménez Cano** (testigo de la demandada) manifestó no recordar la fecha en que inició labores, pero trabajó 7 o 6 años aproximadamente; cuando la testigo ingresó a trabajar, la demandante ya trabajaba allá; que tanto la testigo como la demandante debían entregar un cuenta de cobro; la testigo entregaba la cuenta de cobro cada 15 días que entregaba la producción; el **Sr. Brandon Stiven Castaño Arboleda**, dijo que lleva trabajando con el Sr. Carlos Alberto Muñoz Londoño 6 años; que la demandante se desempeñó como presilladora. El **Sr. Héctor Daniel Arboleda**, aceptó haber trabajado para la sociedad Confecciones Sebas y

Miguel SAS y se retiró en el año 2017; la demandante se desempeñó como operadora de una maquina presilladora.

En consecuencia, con la prueba aportada no solo se evidencia, que la labor desempeñada por la demandante entre los años 2012 a 2021 fue el de operaria de maquina presilladora, es decir, que no existió variación en el giro de las actividades, sino que adicional a ello, en cada uno de los contratos de prestación de servicio se plasmó como dirección del contratante la Diagonal 42F No. 36C-81 Barrio La Camila – Bello, de lo que se logra determinar que las instalaciones de la labor contratada eran las mismas.

Análisis que se hace para concluir, que los accionados contaron con la posibilidad de discutir en el juicio la sustitución patronal que pretenden derrotar, sin embargo, en el hecho 3 de la contestación de la demanda no hicieron pronunciamiento alguno de las situaciones específicas a las cancelaciones de las matrículas de las sociedades Confecciones MAP y Confecciones y Creaciones MAP y continuidad de la prestación del servicio en la misma actividad por parte de la accionante.

Con fundamento en lo expuesto, considera la Sala que la decisión de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y no se accederá a la solicitud de revocar la declaración de la existencia de la sustitución patronal.

Ahora bien, en relación a la solidaridad reconocida en primera instancia, sostiene el apelante que la misma se derivada de la sustitución patronal que no fue solicitada por la demandante. Argumento que no será acogido en esta instancia, y se CONFIRMARÁ la solidaridad declarada, teniendo en cuenta que conforme se indicó, la declaración de la sustitución se ajusta a derecho y no es incongruente con los hechos de la demanda, y en ese sentido se debe de entender como implícita la declaración de la solidaridad del Sr. Manuel Antonio Pérez Galvis y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS, que fuera contemplada en el art 69 del CST que establece *“RESPONSABILIDAD DE LOS {EMPLEADORES}. 1. El antiguo y el nuevo {empleador} responden solidariamente las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo {empleador} las satisficere, puede repetir contra el antiguo. (...)”*.

2. De las prestaciones sociales y vacaciones

En la sentencia recurrida, se declaró la prescripción parcial de las acreencias laborales anteriores al 23 de julio de 2019, al ser la demanda radicada el 22 de julio de 2022 y no haberse demostrado la interrupción de la prescripción.

Una vez leída por la Juez las pretensiones condenatoria subsidiarias, al no salir adelante las pretensiones principales, absolvió al reajuste de prestaciones sociales por considerar que no había lugar a condenar a los accionados a su reconocimiento en vista que ni en hechos ni en las pretensiones de la demanda solicitó la actora el pago de las prestaciones sociales y no habló de prestaciones sociales impagas, sino que habló de su reajuste; sostuvo que la demandante aceptó haber recibido la liquidación definitiva de prestaciones sociales, vacaciones y salario, a la terminación del contrato por valor aproximado de \$850.000; que no se hizo referencia a cuáles son las prestaciones sociales frente a las cuales pretende su reajuste o las que fueron pagadas en forma deficitaria, no hay esfuerzo probatorio para demostrarlo, y señala que se trata de una pretensión abstracta.

Decisión que para esta Corporación es desacertada, ya que al remitirnos a la pretensión condenatoria subsidiaria 2.2 se solicitó:

“Que se condene a los demandados de manera individual, conjunta o solidaria, al reconocimiento y pago en favor de mi poderdante, de las sanciones de mora establecidas en los artículos 65 del C.S.T. y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como el pago de los intereses a las cesantías doblados como consecuencia por la falta de pago y el **pago deficitario de salarios y prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones) y demás conceptos laborales, causados y no pagados**, ni consignados en el fondo respectivo durante toda la vigencia del contrato.” (Resalto de la Sala)

Y el reajuste de prestaciones sociales del que habla la A QUO se debía al reconocimiento de las horas extras, interpretación de la demanda que se hace, porque con posterioridad a la solicitud de pago deficitario en la pretensión 2.2, se solicitó en las pretensiones 2.5 y 2.6 el pago de horas extras y reajustes así:

“2.5. Que se condene a los demandados de manera individual, conjunta o solidaria, a reintegrar a mi mandante todos los valores que no le fueron pagados por concepto de **horas extras** durante el transcurso del vínculo laboral.

2.6. Que se condene a los demandados de manera individual, conjunta o solidaria, a pagar a mi mandante el **reajuste** de prestaciones sociales (cesantías, intereses sobre las mismas, primas de servicios), vacaciones y demás conceptos laborales de manera retroactiva durante el transcurso de todo el vínculo laboral.”

Y otra razón para considerar que la parte demandante invocó la inexistencia del pago de las prestaciones sociales por parte de su empleador, se extrae del hecho 3º de la demanda, donde manifestó que su renuncia involuntaria se vio motivada porque “**no le pagaban** sus prestaciones sociales, salarios, horas extras y aportes al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), a los cuales tenía derecho.” (Resalto de la Sala) (expediente digital 03).

Bajo ese entendido, encuentra la Sala probado que los empleadores realizaron el pago de prestaciones sociales en los años 2012 a 2020, conforme a las liquidaciones de prestaciones sociales que reposan en los fls 32 a 40 del expediente digital 06, y teniendo en cuenta que, en el interrogatorio de parte, la Sra. Carolina Franco Rojas aceptó haber recibido a la terminación del contrato el pago de salarios y prestaciones sociales por un valor aproximado de \$850.000.

Ahora, como en primera instancia se declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 2 de enero de 2012 y el 15 de diciembre de 2021, y de las liquidaciones de prestaciones sociales reconocidas por los empleadores se extrae que las mismas se liquidaron por periodos laborados desde los meses de febrero, marzo o abril hasta el mes de diciembre de cada anualidad, da lugar a realizar la liquidación de las prestaciones sociales y vacaciones a efectos de determinar si existió la falta de pago o un pago deficitario, conforme fue solicitado en la demanda.

Se advierte que la liquidación se realizará teniendo en cuenta la prescripción parcial de las prestaciones sociales, en vista que la relación laboral tuvo lugar del 2 de enero de 2012 al 15 de diciembre de 2021, se demandó dentro de los 3 años establecidos por los arts. 488 del C.S.T y 151 del CPT y de la SS, ello es, el 22 de julio de 2022, sin que se haya interrumpido el término prescriptivo al no existir prueba de reclamación elevada los empleadores demandados. En ese sentido, se encuentran prescritas las prestaciones sociales anteriores al 22 de julio de 2019 y las vacaciones anteriores al 22 de julio de 2018.

Una vez realizada la liquidación de prestaciones sociales con base en los salarios promedios reportados en las liquidaciones de prestaciones sociales de los años 2012 a 2020 aportadas por la accionada en los folios 32 a 40 del expediente digital 06 y para el año 2021 se tomó el salario mínimo al no estar acreditado un salario superior. Liquidación que arroja lo siguiente:

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES 2019		
CESANTÍAS	SALARIO*DÍAS/360	
	985,148*360	
	360	
	\$ 354.653.280	
	360	
TOTAL	\$	985.148
INTERÉS CESANTÍA	CESANTÍA*DÍAS*0,12/360	
	985148*360*0,12	
	360	
	\$ 42.558.394	
	360	
TOTAL	\$	118.217,76
PRIMA DE SERVICIOS	SALARIO*DÍAS/360	
	985,148*180	
	360	
	\$ 177.326.640	
	360	
TOTAL	\$	492.574
VACACIONES 2018 Y 2019		
22/07/2018 al 31/12/2018	SALARIO MENSUAL PROMEDIO	\$ 869.453
	SALARIO DIARIO	\$ 28.982
	SALARIO DIARIO*6,625	
	\$ 192.004	
1/01/2019 al 31/12/2019	SALARIO MENSUAL PROMEDIO	\$ 985.148
	SALARIO DIARIO	\$ 32.838
	SALARIO DIARIO*15	
	32,838*15	
	\$ 492.574	
TOTAL VACACIONES 2018 y 2019	\$	684.578
TOTAL A PAGAR 2019	\$	2.280.517,96

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES 2020

CESANTÍAS	SALARIO*DÍAS/360	
	980657*360	
	360	
	\$	353.036.520
	360	
TOTAL	\$	980.657
INTERES CESANTÍA	CESANTÍA*DÍAS*0,12/360	
	980657*360*0,12	
	360	
	\$	42.364.382
	360	
TOTAL	\$	117.678,84
PRIMA DE SERVICIOS	SALARIO*DÍAS/360	
	980657*360	
	360	
	\$	353.036.520
	360	
TOTAL	\$	980.657
VACACIONES 2020		
1/01/2020 al 31/12/2020	SALARIO MENSUAL PROMEDIO	\$ 980.657
	SALARIO DIARIO	\$ 32.689
	SALARIO DIARIO*15	
	980657*15	
	\$	490.329
TOTAL VACACIONES 2020	\$	490.329
TOTAL A PAGAR 2020	\$	2.569.321

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES 2021

CESANTÍAS	SALARIO*DÍAS/360	
	1,014,980*345	

Radicado Único Nacional 05-088-31-05-002-2022-00290-01
Radicado Interno 164-23

			360
	\$	350.168.100	
		360	
TOTAL	\$	972.689	
INTERÉS CESANTÍA	CESANTÍA*DÍAS*0,12/360		
		972689*345*0,12	
		360	
	\$	40.269.332	
		360	
TOTAL	\$	111.859,25	
PRIMA DE SERVICIOS	SALARIO*DÍAS/360		
		1,014,980*345	
		360	
	\$	350.168.100	
		360	
TOTAL	\$	972.689	
VACACIONES 2020			
1/01/2021 al 15/12/2021	SALARIO MENSUAL PROMEDIO	\$	1.014.980
	SALARIO DIARIO	\$	33.833
	SALARIO DIARIO*14,37		
	10149807*14,37		
	\$	486.175	
TOTAL VACACIONES 2020	\$	486.175	
TOTAL A PAGAR 2021	\$	2.543.413	

	VALOR REAL	VALOR PAGADO	DIFERENCIA
VACACIONES 2018	\$ 192.004	\$ 145.398	\$ 46.606
LIQUIDACION 2019	\$ 2.088.514	\$ 844.535	\$ 1.243.979
LIQUIDACION 2020	\$ 2.569.321	\$ 806.263	\$ 1.763.058
LIQUIDACION 2021	\$ 2.543.413	\$ 850.000	\$ 1.693.413
TOTAL ADEUDADO			\$ 4.747.056

Con fundamento en lo anterior, se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia y en su lugar se CONDENARÁ al señor Manuel Antonio Pérez Galvis y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS al reconocimiento y pago a la demandante en forma solidaria, de la suma de **\$4.747.056** por concepto de

prestaciones sociales de los años 2019 a 2021 y vacaciones de los años 2018 a 2021, en proporción al tiempo laborado.

3. De la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía

Solicita la parte demandante en el recurso de apelación, el reconocimiento de esta sanción por estar probada la mala fe del empleador al disfrazar la relación laboral y porque no fue consignada el auxilio de cesantía en el fondo.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en recientemente sentencia SL 4311 de 2022 dijo:

*“Pues bien, esta Corporación ha señalado de manera inveterada que la sanción moratoria prevista en la norma atrás citada no constituye una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al finiquitar el contrato de trabajo deje de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudados, de ahí que la misma encuentre lugar cuando quiera que, en el marco del proceso, **el empleador no aporte razones serias y atendibles de su conducta, en la medida que razonablemente lo hubiere llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales y, en este caso, se le tendrá como exonerado de la sanción prevista en el precepto legal referido.** Situación que fue justamente la que descartó el ad quem, toda vez que estableció que el ánimo de la demandada con los denominados bonos de campo fue la de sustraerse de sus obligaciones laborales.*

Por eso se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor moroso, así como un análisis conjunto de las pruebas y circunstancias que rodearon el marco de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos expuestos por la defensa son razonables y aceptables. En efecto, en la sentencia SL3936-2018, entre muchas otras...

*Asimismo, cumple acotar que **es el empleador quien debe asumir la carga de probar que obró sin intención fraudulenta,** como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL199-2021:*

[...] cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha

dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política. (...)
(Resalto de la Sala)

En ese orden de ideas, no saldrá avante la sanción moratoria solicitada, porque pese a asistirle razón a la apelante cuando advierte el actuar reprochable a los demandados de celebrar contratos de prestación de servicios cuando en realidad se trataba de un contrato de trabajo y la falta de consignación del auxilio de cesantía, lo cierto es que se encuentra probado que año tras año, ello es, de 2012 a 2021 los accionados liquidaban las prestaciones sociales incluyendo en ellas el pago del auxilio de cesantía, y fue aceptado por la demandante en su interrogatorio de parte, el pago de los conceptos laborales para el momento de la terminación del contrato.

Siendo, así las cosas, no se evidencia interés del empleador de defraudar los derechos laborales de la Sra. Carolina Franco Rojas al no realizar la consignación del auxilio de cesantía en el fondo correspondiente, pues a todas luces el dinero entro a las arcas de la demandante.

En ese sentido se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia de absolver de la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990, pero no porque los accionados hayan considerado que se estaba ante la presencia de un contrato de prestación de servicios (como se indicó en primera instancia), sino por lo explicado con anterioridad.

4. De la medida cautelar

Solicita la parte demandante que como medida cautelar se decrete la inscripción de la demanda del establecimiento de comercio Sebas y Miguel SAS.

Al respecto, según el doctrinante Jorge Forero Silva, en su obra medidas cautelares en el código general del proceso indica que *“los procesos ejecutivos tienen como finalidad satisfacer la prestación que se reclama, y dicho fin no se hará efectivo sin la materialización de las medidas cautelares, por lo que sin bienes cautelados, el proceso resulta inocuo, inútil improbablemente se cumplirá la obligación, pues son las cautelas las que constriñen al deudor a su satisfacción”*.

Concretamente con respecto a las medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales establece el artículo 85 A del C.P.T y SS, adicionado por la Ley 712 de 2001, lo siguiente:

*ART. 85A.. **Medida cautelar en proceso ordinario.** Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle **CAUCIÓN** para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.*

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. (Resalto de la sala).

Conforme al aparte transcrito se pueden establecer tres condiciones fácticas a saber: la medida procede cuando el demandado: i) Está efectuando actos tendientes a insolventarse, ii) Lleva a cabo actos tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia o, iii) **Se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**. En el caso del último numeral, la apreciación debe hacerse por el juez, quien, una vez evaluadas las pruebas, tiene la posibilidad de considerar, si las dificultades que afronta el demandado revisten o no el carácter de gravedad o seriedad, exigidos por la norma.

Para el caso en concreto se advierte que según lo descrito en la demanda y en la solicitud de decreto de las anteriores medidas cautelares no se expresan por la parte actora cuales son las razones o hechos por los cuales se solicita dicha medida, esto es, si es que el demandado está realizando actos tendientes a insolventarse, o si está realizando actos tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia o, si se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, razones estas por las cuales, además de no encontrarse demostradas las anteriores circunstancias, es la justificación por lo que no hay lugar a acceder a la medida cautelar solicitada.

Sin costas en esta instancia por no haber prosperado el recurso de apelación de la parte accionada y por haber prosperado parcialmente la apelación de la parte demandante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia y en su lugar se **CONDENAR** al señor Manuel Antonio Pérez Galvis y la sociedad Confecciones Sebas y Migue SAS al reconocimiento y pago a la demandante en forma solidaria, de la suma de **\$4.747.056** por concepto de prestaciones sociales de los años 2019 a 2021 y vacaciones de los años 2018 a 2021 en proporción al tiempo laborado, conforme a lo analizado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDA: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: CAROLINA FRANCO ROJAS
DEMANDADO	: CARLOS ALBERTO MUÑOZ LONDOÑO, MANUEL ANTONIO PÉREZ GALVIS, CONFECCIONES SEBASTIÁN Y MIGUEL SAS,
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-002-2022-00290-01
RADICADO INTERNO	: 164-23
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, CONDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 30 de agosto de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 30 de agosto de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO